

Palabras de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión de la CEPAL, en ocasión de la inauguración de la Conferencia “Políticas Públicas e Impacto Distributivo”

Santiago 17 y 18 de agosto de 2010

Autoridades nacionales y de organismos internacionales

Estimados invitados, panelistas,

Amigas y amigos

Quiero primero agradecer a la cooperación alemana (InWENT y GTZ) por su apoyo y disposición a acompañarnos en estos esfuerzos y por su trabajo en la región.

Quiero también dar la bienvenida a autoridades, expertos y funcionarios internacionales que nos acompañarán durante estos días en Santiago, donde se presentarán y discutirán temas relacionados con el impacto distributivo de las políticas públicas.

Déjenme primero decirles que la organización de esta Conferencia complementa los cambios que hemos introducido en el Estudio Económico, una de nuestras publicaciones insignias, en los últimos años. A partir del 2006 se incluyó en este documento, además del análisis de la coyuntura regional, un conjunto de capítulos temáticos en que se profundiza el examen de ciertos aspectos de particular relevancia para la región. En este caso, el tema a tratar es el impacto distributivo de las políticas públicas.

Esta conferencia, que cuenta con el apoyo de Inwent y GTZ, nos permitirá inaugurar una nueva costumbre: la presentación de estos capítulos temáticos del Estudio Económico ante autoridades y expertos.

Como se ha hecho énfasis en este último Documento, mejorar los impactos distributivos y promover la igualdad y la cohesión social en América Latina y el Caribe implica la necesidad de impulsar políticas públicas eficaces en diferentes ámbitos claves.

En primer lugar, la política pública debe lograr el máximo resultado posible en materia de crecimiento económico y empleo ya que sin un crecimiento estable y sostenido de la economía las demandas de asistencia se multiplican al tiempo que se dificulta la obtención de los recursos para el financiamiento de las acciones estatales necesarias.

En segundo lugar, es imprescindible una modernización de las políticas sociales que abarque tanto aquellas tendientes a aumentar las capacidades de las personas mediante la educación y capacitación laboral como las que conforman un paradigma de protección social fundado en derechos. Estos factores, por otra parte, pueden tener un efecto de retroalimentación positiva para el crecimiento económico.

La evidencia empírica es concluyente acerca del impacto que la alta volatilidad y las crisis macroeconómicas tienen sobre la situación relativa de los sectores más pobres de la población. Ellos son los que deben soportar en mayor medida la pérdida de ingresos y carecen de medios para

amortiguar los efectos negativos de las perturbaciones macroeconómicas, caracterizadas por la caída en los ingresos, la pérdida de empleos y la reducción de beneficios sociales.

En una región que se caracteriza por una elevada heterogeneidad de la estructura productiva, que se traduce en el mercado de trabajo en elevadas brechas de productividad y salarios, el nivel y las características del crecimiento tienen un fuerte impacto en la distribución del ingreso y en el modo en el que distintos grupos sociales acceden a los bienes y servicios que se producen en la economía. Desde esta perspectiva, las modalidades de inserción en los mercados (por ejemplo de trabajo) implican significativas diferencias en el grado en el que distintos grupos son alcanzados por los efectos de las políticas.

Como ha sido muchas veces señalado desde la CEPAL, los episodios de crisis tienen consecuencias en términos de empleo, pobreza e inequidad que demoran en ser compensados en las etapas de expansión, lo cual genera efectos perdurables sobre la desigualdad que pueden incluso convertirse en permanentes en la medida en que se interrumpa la permanencia de los jóvenes pobres en el sistema educativo.

Por otra parte, el hecho de que la capacidad asistencial del Estado en la región se reduzca en los períodos de recesión, dada la característica procíclica del gasto público social, agrega otro factor de volatilidad al consumo de los pobres, exponiéndolos a un riesgo de política adicional. Esto pone de relieve la importancia de contar con un mayor espacio de política que, en este caso, permitiría disponer de instrumentos para proteger a los más necesitados en el momento en que esto suele ser más necesario, esto es en las fases descendentes del ciclo económico.

Uno de los pilares claves para construir ese espacio de políticas, es la creación de capacidades fiscales contracíclicas o bien de posiciones fiscales sustentables en el tiempo tal que, cuando ello sea necesario, se fortalezcan los programas orientados a contrarrestar los efectos sociales de los períodos recesivos, tales como el desempleo y la agudización de la pobreza.

En síntesis, los países de la región enfrentan un reto común que, como se ha expresado en el documento del último Período de Sesiones, implica la necesidad de “avanzar hacia una mayor igualdad en materia de acceso, sobre todo en campos como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la calidad ambiental y la seguridad social”. Las reformas necesarias para cerrar las brechas sociales que caracterizan a la región requieren de fuertes consensos y voluntad política, así como de capacidad institucional y administrativa que vele por la calidad del gasto social. La magnitud de los desafíos que se presentan pone de relieve la centralidad del debate acerca del impacto distributivo de las políticas públicas que abordaremos en estas jornadas.

En la CEPAL consideramos que las políticas públicas deben combinar el financiamiento que mejore el acceso de la ciudadanía a las prestaciones sociales, en forma eficiente, solidaria, oportuna y universal, y teniendo en cuenta el nivel de gobierno más adecuado para esta provisión. Este debiera ser el eje del nuevo Pacto Fiscal necesario, el cual requiere de un trabajo permanente tendiente a lograr consensos crecientes en cada uno de los aspectos involucrados, en un contexto de mayores demandas por transparencia en el uso de los recursos y mayores exigencias en materia de rendición de cuentas. Políticas públicas acordes con los desafíos a enfrentar requieren de un aprendizaje continuo y la actualización permanente de las formas de intervención requeridas para superar la pobreza y la desigualdad y aumentar el sentido de pertenencia a una economía en crecimiento.

Muchas gracias